

REPÚBLICA DE COLOMBIA



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL META

Auto de Interlocutorio No. 3 1 6

Villavicencio, 23 MAY 2018

REFERENCIA: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
DEMANDANTE: CAJANAL E.I.C. EN LIQUIDACIÓN – UGGP
DEMANDADO: IRMA SUSANA GARCÍA DE GARCÍA
EXPEDIENTE: 50001 - 23 - 33 - 000 - 2012 - 00134 - 00
ASUNTO: MEDIDA CAUTELAR - SUSPENSIÓN PROVISIONAL DEL ACTO QUE RECONOCIÓ UNA PENSIÓN GRACIA

Se ocupa el Despacho de la solicitud de medida cautelar invocada dentro del asunto de la referencia.

1. ANTECEDENTES

Solicita la entidad demandante se decrete la suspensión provisional del acto administrativo No. 22399 del 11 de mayo de 2006 mediante la cual le reconoció una pensión gracia a IRMA SUSANA GARCÍA DE GARCÍA en cuantía de \$1.291.812 a partir del 25 de abril de 2002, en cumplimiento del fallo de tutela del 8 de marzo del 2006 (fol. 64-72, C1).

Afirma que a IRMA SUSANA GARCÍA DE GARCÍA no le asiste ni le asistía el derecho para el reconocimiento de la pensión gracia, de conformidad con las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1993 y 91 de 1989, ya que carecía del requisito de haber laborado 20 años de servicio como docente del orden Municipal, Departamental, Distrital o Nacionalizado, conforme al certificado expedido el 25 de julio de 2002 por la Secretaría de Educación del Departamento del Meta, pues la demandada estuvo vinculada en el orden nacional, toda vez que su nombramiento se realizó como docente en el colegio INEM LUIS LÓPEZ DE MESA – institución educativa de carácter nacional, circunstancia por la cual no le era dable reconocer la prestación mencionada, sino que la realizó dando cumplimiento a una orden judicial, contrariando la normatividad y jurisprudencia que rige la materia.

2. PARA RESOLVER SE CONSIDERA

i) Competencia

El Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera mediante un estudio abordado por el Consejero Ponente Dr. Mauricio Fajardo Gómez¹, concluyó que el auto que resuelve sobre la petición de una medida cautelar debe ser dictado por el respectivo Magistrado Ponente. El Tribunal comparte dicha tesis pues según el artículo 233 del CPACA, en concordancia con sus normas precedentes le asignan al mencionado, la responsabilidad de decidir las.

Si bien es cierto, que según el contenido del artículo 125 del CPACA, la decisión que decrete una medida cautelar debería ser adoptada por la Sala respectiva, por cuanto dicha disposición establece que tratándose de Corporaciones Judiciales, las decisiones a que hace referencia el artículo 243, en sus numerales 1, 2, 3 y 4, deben ser adoptadas en forma colectiva por la Sala correspondiente, estando entre ellas "2. El que decrete una medida cautelar y el que resuelva los incidentes de responsabilidad y desacato en ese mismo trámite", lo cierto es que las normas especiales que en esa misma codificación se ocupan de regular las medidas cautelares, especifican que la decisión en cuanto a las medidas cautelares solicitadas, debe ser adoptada por el juez o Magistrado Ponente respectivo.

A ello, se añade que el artículo 236 de la Ley 1437, indica: "El auto que decrete una medida cautelar será susceptible del recurso de apelación o del de súplica, según el caso...", de donde se concluye que de proferirse la decisión sobre ella, por parte de una Corporación Judicial, tales medios de impugnación resultarían inviables si se tiene en cuenta que el recurso de súplica procede "... contra los autos que por su naturaleza serían apelables, dictados por el Magistrado Ponente en el curso de la segunda o única instancia ..." (Artículo 246 CPACA).

Así las cosas, la decisión sobre la procedencia de la medida cautelar solicitada, será adoptada por este Despacho, tras determinar si resulta necesaria a fin de proteger y garantizar provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia².

¹ Consejo De Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera C.P: Mauricio Fajardo Gómez 14 de mayo de 2014 Proceso: 110010326000201400035 00 (50.222).

² El artículo 229 del CPACA dispone: "Procedencia de la suspensión: En todos los procesos declarativos que se adelanten ante esta jurisdicción, antes de ser notificado, el auto admisorio de la demanda o en cualquier estado del proceso, a petición de parte debidamente sustentada, podrá el Juez o Magistrado Ponente decretar, en providencia motivada, las medidas cautelares que considere necesarias para proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia, de acuerdo con lo regulado en el presente capítulo.

La decisión sobre la medida cautelar no implica prejuzgamiento.

Parágrafo. Las medidas cautelares en los procesos que tengan por finalidad la defensa y protección de los derechos e intereses colectivos y en los procesos de tutela del conocimiento de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo se registrarán por lo dispuesto en este capítulo y podrán ser decretadas de oficio.

ii) Análisis Jurídico sobre las Medidas Cautelares

Indica el artículo 231 del CPACA³, que la suspensión provisional de los efectos de los actos acusados, se decretará cuando se concluya que ellos vulneran las normas superiores invocadas, por su parte, el artículo 234 ibídem señala que desde la presentación de la solicitud y sin previa notificación a la otra parte el juez o magistrado ponente podrá adoptar una medida cautelar cuando cumplidos los requisitos para su adopción, se evidencie que por su urgencia, no es posible agotar el trámite previsto.

El artículo 238 de la Constitución Política atribuye a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo la competencia para suspender provisionalmente por los motivos y con los requisitos que establezca la ley, los efectos de los actos administrativos que sean susceptibles de impugnación por vía judicial.

Los requisitos para decretar las medidas cautelares están contemplados en el artículo 231 de la Ley 1437 de 2011, así:

“Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo, la suspensión provisional de sus efectos procederá por violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado, cuando tal violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud. Cuando adicionalmente se pretenda el restablecimiento del derecho y la indemnización de perjuicios deberá probarse al menos sumariamente la existencia de los mismos.

En los demás casos, las medidas cautelares serán procedentes cuando concurren los siguientes requisitos:

1. Que la demanda esté razonablemente fundada en derecho.
2. Que el demandante haya demostrado, así fuere sumariamente, la titularidad del derecho o de los derechos invocados.
3. Que el demandante haya presentado los documentos, informaciones, argumentos y justificaciones que permitan concluir, mediante un juicio de ponderación de intereses, que resultaría más gravoso para el interés público negar la medida cautelar que concederla.
4. Que, adicionalmente, se cumpla una de las siguientes condiciones:

³ El Artículo 231 del CPACA: Requisitos para decretar las medidas cautelares. Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo, la suspensión provisional de sus efectos procederá por violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado, cuando tal violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud. Cuando adicionalmente se pretenda el restablecimiento del derecho y la indemnización de perjuicios deberá probarse al menos sumariamente la existencia de los mismos. En los demás casos, las medidas cautelares serán procedentes cuando concurren los siguientes requisitos:

1. Que la demanda esté razonablemente fundada en derecho.
2. Que el demandante haya demostrado, así fuere sumariamente, la titularidad del derecho o de los derechos invocados.
3. Que el demandante haya presentado los documentos, informaciones, argumentos y justificaciones que permitan concluir, mediante un juicio de ponderación de intereses, que resultaría más gravoso para el interés público negar la medida cautelar que concederla.
4. Que, adicionalmente, se cumpla una de las siguientes condiciones:
 - a) Que al no otorgarse la medida se cause un perjuicio irremediable, o
 - b) Que existan serios motivos para considerar que de no otorgarse la medida los efectos de la sentencia serían nugatorios”.

- a) Que al no otorgarse la medida se cause un perjuicio irremediable, o
- b) Que existan serios motivos para considerar que de no otorgarse la medida los efectos de la sentencia serían nugatorios” (Se resalta)

El inciso primero del referido artículo, prevé la medida cautelar de suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos, empero, para su decreto, la norma exige el análisis del acto administrativo demandado comparado con las normas invocadas por el demandante como transgredidas; por lo que, en el caso se abordará la comparación normativa para determinar si la suspensión provisional deprecada, es procedente.

iii) Análisis Jurídico y Jurisprudencia sobre la Pensión Gracia

La Ley 114 de 1913 otorgó a los maestros de escuelas oficiales en su artículo 1°, una pensión nacional por servicios prestados, en su artículo 4° estableció entre uno de sus requisitos que el docente pasible de la Pensión Gracia, probara que no recibía otra pensión o recompensa de carácter nacional⁴; esta pensión establecida inicialmente para los docentes oficiales de primaria se extendió por la Ley 116 de 1928 a los empleados y profesores de las escuelas normales y los inspectores de instrucción pública, más adelante fue ampliado el espectro a través de la Ley 37 de 1933 a los maestros que hubiesen completado los servicios señalados por la ley en establecimientos de enseñanza secundaria.

El literal A del numeral 2 del artículo 15, de la Ley 91 de 1989, preceptúa:

“los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubiere desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos, esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación”.

La norma transcrita alude a los docentes Departamentales, Distritales o Municipales, que hubiesen hecho parte en el proceso de nacionalización de la educación primaria y secundaria que venían prestando los Departamentos, Municipios, Intendencias y Comisarías, estipulado en la Ley 43 de 1975; así es como se otorgó la oportunidad de acceder a la Pensión Gracia, siempre que reunieran la totalidad de los requisitos y que hubiesen estado vinculados de conformidad con las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, y 37 de 1933.

⁴ Sentencia No. 25000-23-25-000-1997-04474-01 M.P. Nicolás Pájaro Peñaranda.

Se observa que los docentes que se vincularon después del 31 de diciembre de 1980, no tienen la posibilidad de acceder a la pensión gracia; también se determina que dentro del grupo de beneficiarios de la pensión discutida no se encuentran incluidos los docentes nacionales, sino los nacionalizados, esta conclusión que emana no sólo del tenor de la norma sino de los requisitos prescritos en la Ley 114 de 1913, estableciéndose de manera inequívoca, que la pensión gracia no puede ser reconocida a un docente nacional, pues constituye requisito indispensable para su viabilidad que el maestro no reciba retribución alguna de la nación por servicios que le preste o que no se encuentre pensionado por cuenta de esta. Por ende los únicos beneficiarios de tal prerrogativa eran los educadores locales o regionales.

El H. Consejo de Estado en providencia del 6 de marzo de 2008, M.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez, radicado No. 15001-23-31-000-2002-00407-01, consideró que no es posible el reconocimiento de la pensión gracia a aquellos docentes que hubiesen laborado en los colegios INEM debido a que por ser estos establecimientos educativos del orden nacional, sus docentes también comportan la misma categoría, lo cual es incompatible con los requisitos exigidos para acceder a la pensión gracia, así:

“De acuerdo con la documental que reposa a folios 56 y ss. del expediente, el actor prestó sus servicios al Departamento de Cundinamarca del 12 de abril de 1978 al 11 de febrero de 1980 y como docente nacional en el INEM CARLOS ARTURO TORRES de Tunja entre el 30 de abril de 1980 y el 24 de febrero de 2000 (fecha de la certificación).

Conforme con la anterior relación de tiempo laborado se demuestra que el actor ejerció por un lapso menor el cargo de docente departamental, mientras que el resto del tiempo lo laboró por designación del Gobierno Nacional -en el INEM CARLOS ARTURO TORRES de Tunja- de donde se concluye que a la luz del inciso primero del artículo 10 de la Ley 91 de 1989, tiene el alcance de personal nacional, y ello impide el reconocimiento de la pensión impetrada pues es indispensable para lograr el reconocimiento y pago de la pensión gracia que el docente haya prestado sus servicios en planteles territoriales -no nacionales- en razón de la incompatibilidad de percibirla conjuntamente con otra pensión de carácter nacional.

En consecuencia, se advierte, que dado el carácter excepcional con que fue instituida la pensión gracia; para su reconocimiento y pago es indispensable acreditar el cumplimiento de la totalidad de los requisitos, como que el interesado haya prestado los servicios en planteles departamentales o municipales, supuestos fácticos que no se cumplen en el sub examine.

En estas condiciones el tiempo laborado en planteles del orden nacional no es útil para acceder al reconocimiento de la pensión gracia, y así las cosas, el proveído recurrido que negó las súplicas de la demanda amerita ser confirmado.

Sin embargo, en gracia de discusión, si se admitiera que en virtud de la Certificación del Departamento de Boyacá otorgada con base en el artículo 14 de la Ley 60 de 1993 -aunque el recurrente no desarrolla el punto y tan solo lo plantea- los docentes nacionales establecidos en su territorio pasarían a ser territoriales, tampoco cumpliría el actor con el requisito exigido pues la Certificación a que alude se verificó mediante la Resolución No. 6016 expedida por la Ministra de Educación Nacional el 22 de diciembre de 1995, y notificada al Gobernador de Boyacá el 26 de diciembre próximo siguiente y, así, para el 11 de julio de 2000 -fecha de la solicitud pensional- tan sólo habría completado cuatro (4) años y seis (6) meses de "*tiempo territorial*", los que sumados un año (1) y seis (6) meses certificado por el Departamento de Cundinamarca, serían insuficientes para acreditar el requisito de los veinte (20) años de servicio en el nivel territorial que exige la ley para tener derecho a la pensión gracia." (Resaltado fuera del texto).

Aunado a ello, se resalta que el artículo 3 del Decreto 1962 de 1969 creó los colegios INEM como institutos nacionales, con el propósito de implementar la educación media diversificada, observándose que el colegio INEM de Villavicencio entro en funcionamiento a partir del año 1971.

iv) Caso Concreto

CAJANAL E.I.C.E. en liquidación pretende como medida cautelar que se decrete la suspensión provisional de la prestación reconocida en el acto administrativo No. 22399 del 11 de mayo de 2006, aduciendo que se trata de una pensión gracia que fue concedida en cumplimiento de un fallo de tutela, pese a que IRMA SUSANA GARCÍA DE GARCIA no logro acreditar los 20 años de servicios en las condiciones exigidas por la Ley, pues conforme al certificado expedido por la Secretaria de Educación del Departamento del Meta de fecha 25 de julio de 2002, la demanda prestó sus servicios como docente Nacional en el colegio INEM – LUIS LÓPEZ DE MESA de Villavicencio.

La anterior solicitud es viable, sin que ello implique el prejuzgamiento, por las razones que se pasan a exponer:

Al examinar el acto administrativo de reconocimiento, cuya suspensión provisional se procura, se advierte que para efectos de reconocer la pensión gracia, Cajanal tuvo en cuenta el tiempo laborado por la docente Irma Susana García de García en el colegio INEM – LUIS LÓPEZ DE MESA de Villavicencio (fol. 80, C1), institución educativa del orden nacional, proceder que pugna con los postulados normativos que inspiran tal reconocimiento y el espíritu de las normas que establecen que dicho estímulo se reserva para los docentes con vinculación del nivel municipal, departamental, distrital o nacionalizados.

Razón por la cual, no era procedente el reconocimiento de la pensión gracia otorgada, ya que los tiempos laborados por la demandada fueron en calidad de docente nacional, contrariando así las normas que rigen esta prestación; por tanto, se estima conculcadas las normas constitucionales que pregonan la legalidad que debe imperar en las actuaciones de la administración.

Aunado a lo anterior, este Juez considera que el desembolso de dineros del Estado por concepto del reconocimiento de la pensión gracia otorgada mediante fallo de tutela a Irma Susana García de García, constituye un detrimento del erario ya que se le impuso a la entidad el reconocimiento de una prestación con tiempos laborados que no son aceptables; situación que permite a la luz del artículo 234 de la Ley 1437 suspender el acto administrativo demandado, mientras se encuentre en curso el estudio de su legalidad.

En consecuencia, se decretará la medida cautelar solicitada al considerarla necesaria para proteger y garantizar provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia, ya que de no hacerlo resultaría gravoso para el interés público, pues en caso de acceder a las pretensiones de la demanda los efectos de la sentencia serían nugatorios por lo infructuoso que resultaría tratar de obtener la devolución de los dineros que por concepto de las mesadas pensionales se hubieran pagado a la demandada.

Ahora, respecto a la caución judicial para el trámite de la medida cautelar, de conformidad con lo establecido en el artículo 232 de la Ley 1437 de 2011⁵, no hay lugar a su imposición, teniendo en cuenta que el solicitante de la medida cautelar es una entidad pública.

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Administrativo del Meta,

RESUELVE

⁵ Artículo 232. *Caución*. El solicitante deberá prestar caución con el fin de garantizar los perjuicios que se puedan ocasionar con la medida cautelar. El Juez o Magistrado Ponente determinará la modalidad, cuantía y demás condiciones de la caución, para lo cual podrá ofrecer alternativas al solicitante.

La decisión que fija la caución o la que la niega será apelable junto con el auto que decrete la medida cautelar; la que acepte o rechace la caución prestada no será apelable.

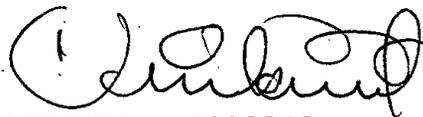
No se requerirá de caución cuando se trate de la suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos, de los procesos que tengan por finalidad la defensa y protección de los derechos e intereses colectivos, de los procesos de tutela, ni cuando la solicitante de la medida cautelar sea una entidad pública.

PRIMERO: DECRETAR LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL del acto administrativo No. 22399 del 11 de mayo de 2006, expedido por la Caja Nacional de Previsión Social EICE, mediante la cual se reconoció y ordenó pagar a favor de Irma Susana García de García una pensión gracia, conforme a la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ORDENAR a LA UNIDAD DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP-, suspender de manera inmediata, el pago de la pensión de gracia reconocida a Irma Susana García de García mediante Resolución No. 22399 del 11 de mayo de 2006, conforme a la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: ABSTENERSE de fijar caución contra la entidad demandante, conforme a lo expuesto en la parte motiva de éste proveído.

Notifíquese y Cúmplase



NICE BONILLA ESCOBAR

Magistrada